

# **Declaración**

## **VII Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y del Campo Popular**

**Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina**

**del 22 al 24 de julio de 2011**

Las organizaciones reunidas en el **VII Encuentro Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y del Campo Popular** convocadas por la **Unión de Campesinos Poriajhú** en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina declaramos que:

A pesar del propicio escenario latinoamericano actual, de gobiernos populares nacidos del colapso de las políticas neoliberales de los años '90, aún nos atan hilos de las viejas políticas coloniales reconfiguradas en anónimos capitales transnacionalizados. Subsisten políticas que priorizan los intereses de lucro de las minorías en perjuicio del bienestar de la mayoría de la población y todavía queda un largo trecho para alcanzar la justicia social.

En nuestro país, los avances logrados en los últimos tiempos, como la estatización de los fondos de jubilación y pensión, la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, el establecimiento de la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la autonomía de los organismos financieros internacionales, el juzgamiento a los genocidas de la última dictadura y ciertas mejoras en la distribución del ingreso deben ser radicalizados hacia una verdadera distribución de la riqueza, mediante la recuperación de los bienes comunes naturales, el acceso a la tierra y la Soberanía de los pueblos sobre nuestros territorios.

Durante los últimos años, la conflictividad por la tierra y los territorios se ha incrementado y agravado en el marco de la profundización de un modelo agroexportador que provoca la destrucción de la vida de los pueblos.

Esta conflictividad se expande a lo largo y ancho de Argentina impulsada por el poder económico del agronegocio mediante el incumplimiento de leyes, estafas diversas, represión y hasta el asesinato, con la responsabilidad de algunos gobiernos provinciales y la tolerancia del gobierno nacional.

Este escenario está tomando carices dramáticos en el interior profundo de la Argentina , señalando, a modo de ejemplo somero, la situación en las provincias de Río Negro, Chaco, Formosa y Santiago del Estero:

- En la provincia de Río Negro, el no reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos originarios; la transnacionalización de los bienes comunes naturales (minerales, petróleo, gas, agua); el acuerdo para el proyecto de inversión agroalimenticio suscripto entre la empresa estatal china Heilngjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group CO. LTD. y el gobierno de la provincia, cediendo 320 mil hectáreas de valles para la producción agrícola destinada en exclusividad al consumo del país asiático.
- En la provincia de Chaco, el modelo extractivo ha llevado al deterioro ambiental de los ecosistemas del que dependen las comunidades Qom y Wichi condenándolas al hambre, la desnutrición y la enfermedad; el convenio firmado por el gobierno provincial con el Grupo Al-Khorayef de Arabia Saudita, que otorgará 200 mil hectáreas de la zona de El Impenetrable para un proyecto agroalimentario con destino único a ese país, con el riesgo de un posible desplazamiento de 60 mil personas, en su mayoría pueblos originarios y criollos.
- En la provincia de Formosa, los pobladores de La Florencia , departamento de Matacos, denuncian que funcionarios locales y provinciales los presionan bajo amenaza de perder el beneficio de la Asignación Universal por Hijo y para embarazadas para firmar un documento de apoyo a la decisión del gobierno provincial de expropiar 30 mil hectáreas de las 90 mil habitadas por sus antiguos pobladores, con la excusa de regularizar su situación, en una maniobra de acorralamiento territorial.
- En la provincia de Santiago del Estero, continúa la criminalización de los militantes sociales de organizaciones campesinas que denuncian los desalojos violentos, los desmontes, las fumigaciones con agrotóxicos y los ataques armados de los empresarios sojeros; el poder judicial sigue priorizando el derecho de propiedad sobre el derecho posesorio.

Frente a esta situación sucintamente descrita, las organizaciones reunidas en este VII Encuentro expresan que seguirán luchando para resistir a estos atropellos, y llaman a incrementar y fortalecer la articulación entre todas las organizaciones campesinas, indígenas y del campo popular en vista a recuperar nuestros territorios y los bienes comunes naturales para los pueblos, y retomar el control de nuestro sistema alimentario, hoy en manos del poder monopólico de las transnacionales y sus representantes locales.

Para ello:

Exigimos la implementación genuina de políticas de Soberanía Alimentaria.

Una Reforma Agraria Integral con apoyo económico para una producción y comercialización ambientalmente sustentable.

La inmediata suspensión de los desalojos de campesinos e indígenas.

Una Ley de Propiedad de la Tierra que impida la concentración y extranjerización de la misma, con revisión de las transacciones establecidas en el pasado.

**Organizaciones participantes:**

Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y de Trabajadores Rurales de Argentina (COCITRA); Unión de Campesinos Poriajhú, provincia de Chaco; Consejo Asesor Indígena (CAI); Consorcio de Pequeños Productores Rurales de El Sauzalito, Chaco; Grupo de artesanos y artesanas de la comunidad Wichi de El Sauzalito; Asociación de Pequeños Productores de Corzuela, Chaco; Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CLSA) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), seccional Chaco; Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo.